

Tratado contra la Corrupción Gubernamental 1

EL FRAUDE DE LAS ÉLITES: Los abogados en la Academia



**¡Nuevo
Libro!**

**Dr., Dr. y Lcdo. Carlos Alá Santiago Rivera
Dra. y Lcda. Karin J. Robles Ramos**

De venta en todas las librerías de Puerto Rico y Publicaciones Puertorriqueñas
(787) 759-9673. ventas@ppeditores.com

¡Son abusadores del derecho que reproducen una cultura jurídica podrida y empobrecida! Unos, abogados dedicados a la academia, otros, asesores o representantes legales en complicidad y algunos fungiendo como oficiales examinadores mediante un contrato de representación legal externa con la UPR. Profesionales que propician un malgasto indebido de cientos de miles de dólares del Pueblo de Puerto Rico al proteger a los que incumplen la normativa universitaria. Sin justificación, reconocen títulos de doctor inexistentes tratando maestrías como si fueran doctorados. Se otorgan ascensos en rango al momento de ser reclutados. Algunos, inclusive, han accedido a sus permanencias sin obtener un doctorado. Son, per cápita, la facultad más costosa del Recinto, pero no la más productiva. Gozan de salarios más altos, aunque su carga de trabajo es menor. Muchos no respetan la **dedicación exclusiva** que les requiere el Consejo de acreditación de la American Bar Association (ABA) en su trabajo universitario.

Este libro analiza y denuncia el **fraude académico más vergonzoso y costoso perpetuado en la historia de la UPR**. Administración de personal dolosa, contraria al derecho, a la normativa universitaria y al principio de mérito que debe regir las transacciones del personal docente. Este gravísimo fraude fue gestado por la decana **Vivian Neptune Rivera** y el Comité de Personal del año académico 2021-2022 de la facultad de la Escuela de Derecho del Recinto del Río Piedras, compuesto por los Lcdos. **Hiram Meléndez Juarbe**, **William Vázquez Irizarry** y **Carmelo Delgado Cintrón**, en su cuestionable y amañado proceso de reclutamiento docente. Todos indujeron el nombramiento de candidatos sin doctorado, por encima de doctores, a los que sobre compensan durante sus carreras por haberes académicos que no tienen. Los aludidos no son los arquitectos intelectuales del fraude, fueron otros antes que ellos. Sin embargo, son responsables de auspiciar, perpetuar y en algunos casos beneficiarse del mismo.

Este fraude se estudia contextualizando el irresponsable trámite de las apelaciones presentadas por la **Dra. y Lcda. Karin J. Robles Ramos** ante los foros apelativos administrativos del sistema universitario en el 2021, que cuestionan y denuncian dos procesos de reclutamiento y selección parcializados, inducidos a favorecer a candidatos sin doctorado y violatorios de la normativa universitaria. Posponer la atención de los casos en sus méritos acudiendo a argucias procesales que no son características de los procesos apelativos administrativos ha sido el patrón por cuatro años. Indebido proceder que no solo ha resultado en el malgasto de cientos de miles de dólares, sino que implica la desnaturalización de esos procesos, cuya finalidad es que las controversias se resuelvan rápido y de forma justa e imparcial.

El **Dr. Luis A. Ferrao Delgado**, exrector y expresidente de la UPR, conocía del fraude cuando realizó tres indebidos nombramientos de profesores sin doctorado por encima de doctores en el 2021. La actual rectora, la **Dra. Angélica Varela Llavona**, ha actuado con la misma impunidad. A ambos les faltó el carácter administrativo y la rectitud intelectual de corregir lo equivocado.

La gerencia universitaria ha comprado el apoyo incondicional de nueve (9) de los licenciados en su plantilla regular de asesoría jurídica. El indebido rol de cada uno en el caso es analizado en el libro. Para evitar que la doctora Robles Ramos prevalezca fueron calculadamente designados como **oficiales examinadores externos**, el **Lcdo. Jorge O. Sosa Ramírez**, la **Lcda. Lizzie Tomasini** y la **Lcda. Alondra Fraga Meléndez**, quienes en conjunto suman **37 años** de contrataciones con la UPR y han devengado en conjunto más de **2.2 millones de dólares en ese periodo**, lo que implica un conflicto de interés económico para alguien obligado a fungir como funcionario de adjudicación neutral. El fraude que impunemente han defendido todos se ha extendido a otras instancias de la Universidad y a otras agencias públicas donde otros abogados cobran como doctores sin haber alcanzado ese título.



**De venta en todas las librerías de Puerto Rico y Publicaciones Puertorriqueñas
(787) 759-9673. ventas@ppeditores.com**

Tratado contra la Corrupción Gubernamental

Tomo I.

EL FRAUDE DE LAS ÉLITES: Los abogados en la Academia

La estafa académica y la corrupción gubernamental provocada por la decana **VIVIAN NEPTUNE RIVERA** y el Comité de Personal del año académico 2021-2022 de la facultad de la Escuela de Derecho del Recinto del Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, compuesto por los licenciados **HIRAM MELÉNDEZ JUARBE**, **WILLIAM VÁZQUEZ IRIZARRY** y **CARMELO DELGADO CINTRÓN**, en su cuestionable y amañado proceso de reclutamiento docente. Todo ello, con la anuencia del **DR. LUIS A. FERRAO DELGADO**, ex rector del Recinto de Río Piedras y presidente de la UPR hasta el 15 de febrero de 2025, el **DR. MIGUEL MUÑOZ MUÑOZ**, presidente interino de la UPR, el **DR. ORESTES GONZÁLEZ QUESADA**, actual vicepresidente de la UPR, de la **DRA. ANGÉLICA VARELA LLAVONA**, rectora del Recinto de Río Piedras, el CPA **RICARDO DALMAU SANTANA**, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR y la **DRA. MAYRA OLAVARRÍA CRUZ**, expresidenta interina de la Universidad de Puerto Rico.

Dr., Dr. y Lcdo. Carlos Alá Santiago Rivera
Dra. y Lcda. Karin J. Robles Ramos

**Proyecto Académico del Centro de Estudios, Documentación y Análisis Jurídico
e Investigaciones Interdisciplinarias (CEDAJII)**

ENTRE SUS 28 CAPÍTULOS Y TEMAS DISCUTIDOS

PARTE I: El fraude académico de algunos miembros de la facultad de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico

CAPÍTULO 1: 1.1 El Contexto del Fraude; 1.2 Víctimas del Fraude Académico; 1.2.1 Dra. y Lcda. Karin J. Robles Ramos; 1.2.2 Dr. y Lcdo. Francis Daniel Nina; 1.2.3 El pueblo de Puerto Rico; 1.3 Otras Dimensiones del Fraude Académico de la gerencia de la Facultad de Derecho, UPR; 1.3.1 Manipulación sistemática de las convocatorias para puestos probatorios, que permite el acceso al sistema universitario público de profesores sin doctorado; 1.3.2 La manipulación de las convocatorias haciendo equivalente una maestría en derecho a un doctorado en la disciplina, entre otros vicios de diseño e implementación; 1.3.3 Acceder a la permanencia sin cumplir con el requisito de culminar el título de doctor; 1.3.4 Inducir la sobre compensación de profesores falsamente reclutados como si fueran doctores y compensarles como si hubieran obtenido el grado doctoral, concediéndoles un ascenso en rango al momento de su reclutamiento; 1.3.5 Extensión de un beneficio de la facultad regular de la Escuela de Derecho a otros profesores y empleados fuera de la Escuela; 1.3.6 Extensión del Fraude a otras agencias públicas.; 1.3.7 Una práctica profesional extramural “ultra vires” e imposible de supervisar; 1.4 Conclusión. **CAPÍTULO 2:** 2.1 Las contradicciones de la contratación docente de la Escuela de Derecho; 2.2 Interrogantes contestados en el libro; 2.3 La incoherencia de los nombramientos; 2.4 Privilegios académicos deformados en corrupción pública; 2.5 Efectos del fraude en los programas académicos; 2.6 La acrítica colaboración de las autoridades universitarias. **CAPÍTULO 3:** 3.1 La Regla general de reclutamiento de la Universidad de Puerto Rico y el significado de un “título terminal” equivalente; 3.1.1 La regla general de reclutamiento; 3.1.2 El título terminal equivalente al doctorado; 3.1.3 Excepciones a la Regla General y la Certificación Núm. 84, (1997-1998); 3.1.4 Área de difícil reclutamiento; 3.1.5 El historial legislativo de la sección 47.6 del Reglamento General de la UPR; 3.1.6 Incorporación del Título de “Juris Doctor” al Reglamento General de la UPR; 3.1.7 Del Bachiller en Leyes al “Juris Doctor”; 3.1.8 La Correcta Interpretación de la sección 47.6 del Reglamento General de la UPR. **CAPÍTULO 4:** 4.1 La gerencia de la Escuela de Derecho reconoce títulos de doctor fatulos a sus nuevos docentes reclutados y la UPR los sobre compensa con sueldos que no les corresponden. 4.2 El valor académico de las equivalencias; 4.3 Errores del Comité de Personal. **CAPÍTULO 5:** 5.1 La manipulación de convocatorias a puestos docentes en la Escuela de Derecho de la UPR; 5.2 Diseño de Convocatorias Viciadas; 5.3 ¿Cómo se corrige el vicio o distorsión reglamentaria provocado por el Comité?; 5.4 Esquema de Reclutamiento que pervierte y defrauda la normativa institucional. **CAPÍTULO 6:** 6.1 Acceder a la permanencia sin obtener el doctorado: Otro fraude y privilegio indebido; 6.2 El “inbreeding” académico o la generación espontánea de los similares. **CAPÍTULO 7:** El Recinto de Río Piedras de la UPR es una institución de Investigaciones doctorales avanzadas; 7.2 Transición para alcanzar el título de Doctor o ser expulsado del Sistema Universitario (2007-2013); 7.3 Solo un doctorado puede ser equivalente a un doctorado. **CAPÍTULO 8:** 8.1¿Qué presunciones se pueden construir con la obtención de un doctorado y qué lo distingue de una maestría?; 8.2 El proceso y significado de culminar un doctorado; 8.3 Comparación del programa de maestría y doctorado en Derecho de la Universidad de Columbia; 8.3.1 El Programa doctoral; 8.3.2 El Programa de Maestría; 8.4 ¿Cómo se realizan responsablemente las equivalencias de títulos académicos universitarios en la UPR?; 8.5 Contraste del título de doctorado en universidades de Estados Unidos de América y de Europa (en específico España). **CAPÍTULO 9:** 9.1 La manipulación de los estándares del Consejo de acreditación de la American Bar Association (ABA); 9.2 Los peligros de manipular la acreditación al asegurar privilegios para un sector del gremio de abogados; 9.3 La suma de años de escolaridad no equivale al doctorado; 9.4 Los estándares de la ABA y la prohibición federal de fijar sueldos y condiciones de trabajo a las facultades de derecho; 9.5 Estándares de la ABA objeto de revisión por su violación a la ley Antimonopolios de Estados Unidos de América; 9.6 El fracasado modelo de reclutamiento docente en la Escuela de Derecho de la UPR. **CAPÍTULO 10:** 10.1 El descaro de la doble compensación: La práctica profesional extramural de la Escuela de Derecho; 10.2 Un modelo de práctica profesional abusivo; 10.3 La doble compensación; 10.4 Una política salarial diferenciada y privilegiada; 10.5 Una política académica minimalista de la ABA.

PARTE II: El abuso del derecho, ficciones legales y la manipulación del Procedimiento Apelativo Administrativo del Personal Docente por parte de algunos miembros de la gerencia universitaria, sus abogados y representantes legales en la UPR

CAPÍTULO 11: 11.1 Injusticia Procesal Institucionalizada: El Procedimiento Apelativo Administrativo del Personal Docente de la UPR. 11.2 La metamorfosis de los rectores en juzgadores de sus propias determinaciones; 11.3 Notificación adecuada y las formalidades de una Apelación; 11.4 Posposición deliberada de la resolución de

las apelaciones; **11.5** La complicidad del exrector y expresidente Ferrao Delgado. **CAPÍTULO 12:** **12.1** Legado de determinaciones administrativas equivocadas del Dr. Luis A. Ferrao Delgado, exrector del Recinto de Río Piedras y presidente de la Universidad de Puerto Rico hasta el 15 de febrero de 2025; **12.2** Ficciones jurídicas, prácticas administrativas ilegales y la manipulación del Reglamento Apelativo Docente; **12.3** ¿A qué prácticas administrativas nos referimos?; **12.4** ¿Cuáles son las ficciones jurídicas autorizadas por el expresidente Ferrao Delgado para sostener sus cuestionables determinaciones administrativas? **12.4.1** Primera Ficción Jurídico-administrativa: “Comunicar una recomendación es igual a notificar adecuadamente.”; **12.4.2** Segunda Ficción Jurídico-administrativa: “La existencia de un procedimiento de impugnación de recomendaciones ante los decanos.”; **12.4.3** Tercera Ficción Jurídico-administrativa: “Los decanos son una autoridad apelativa reconocida en el Reglamento Apelativo del sistema universitario.”; **12.4.4** Cuarta Ficción Jurídico-administrativa: “Las recomendaciones de los decanos condicionan las decisiones de los rectores por constituir actos gerenciales.”; **12.4.5** Quinta Ficción Jurídico-administrativa: “La entrevista es un criterio de selección para el reclutamiento.”; **12.5** ¿Cuánta responsabilidad comparten el expresidente Ferrao Delgado y sus representantes legales?; **12.6** El desconocimiento del Reglamento Apelativo y la injusta política de defraudar los derechos de los docentes

PARTE III: La lamentable antijuricidad de los aludidos representantes legales, asesores legales y oficiales examinadores contratados por la UPR.

CAPÍTULO 13: **13.1** El debido rol de los funcionarios de adjudicación en los procedimientos apelativos administrativos en la UPR; **13.1.1** El mandato del Artículo 10A del Reglamento Apelativo; **13.1.2** La necesaria independencia e imparcialidad del examinador; **13.1.3** El debido trámite del caso y de su expediente administrativo; **13.1.4** Responsabilidades impuestas y advertencias a los funcionarios de adjudicación por parte de la LPAU.

CAPÍTULO 14: **14.1** Los traqueteos y la manipulación del Reglamento Apelativo desde la Oficina de Asesoría Jurídica y la Rectoría del Recinto de Río Piedras; **14.2** Ausencia de una notificación adecuada a la doctora y licenciada Robles Ramos; **14.3** La debida orientación a las partes sobre sus derechos; **14.4** Injustificada e indebida desestimación por alegada falta de jurisdicción; **14.5** El uso del falso procedimiento de impugnación de recomendaciones ante los decanos; **14.6** Posposiciones deliberadas e innecesarias de la atención a las apelaciones; **14.7** La difamación de la doctora y licenciada Robles Ramos; **14.8** El derecho a ser entrevistado. **CAPÍTULO 15:** **15.1** El Lcdo. Allan E. Charlotten Rivera; **15.2** Un asunto meramente procesal y jurisdiccional; **15.3** Inusitada celeridad; **15.4** La cuestionable alegación de la existencia de un procedimiento administrativo en curso; **15.5** Repercusiones normativas de las conclusiones del oficial examinador Charlotten Rivera; **15.5.1** La imposibilidad de apelar recomendaciones; **15.5.2** Las recomendaciones no son decisiones; **15.5.3** Los decanos no son foros apelativos ni nada que se parezca; **15.5.4** El Lcdo. Charlotten Rivera no evaluó los méritos del caso porque tenía que circunscribirse a un aspecto procesal de índole jurisdiccional; **15.5.5** Charlotten Rivera irresponsablemente obvió referir el caso al exrector Ferrao Delgado para atenderlo en sus méritos. **CAPÍTULO 16:** **16.1** El Lcdo. Jorge Sosa Ramírez; **16.2** Falsa representación de parte de la UPR ante el Tribunal de Primera Instancia; **16.3** Incumplimiento de la UPR de la normativa y de las órdenes del oficial examinador Sosa Ramírez; **16.4** La demanda de *mandamus* contra el doctor Ferrao Delgado, 15 de mayo de 2022; **16.5** Siete meses y medio incumpliendo la normativa; **16.6** Solicitud de tiempo adicional para presentar escritos tardíamente e incumplir el término del Reglamento Apelativo; **16.7** Contradicciones en la ejecución del oficial examinador Sosa Ramírez y solicitud de la reconsideración de su informe. **CAPÍTULO 17:** **17.1** La Dra. Janine Santiago Santiago, el Dr. Reinaldo Berrios, el Dr. y Lcdo. José A. González Taboada y la Lcda. Lizzie Tomasini; El pobre juicio demostrado por la rectora Varela Llavona al seleccionar los miembros del Panel Examinador; **17.2** El rechazo del informe presentado por el oficial examinador Sosa Ramírez; **17.3** Delegación de funciones apelativas al designar al Panel Examinador; **17.4** La renuncia de la Dra. Janine Santiago y su incomprensión del alcance de la delegación de las facultades apelativas de la rectora; **17.5** El desempeño general del Panel y su autonomía; **17.6** Las limitadas y poco informativas resoluciones del Panel; **17.7** Un expediente administrativo manipulado y sin verificación por parte de la doctora y licenciada Robles Ramos; **17.8** Solicitud de reconsideración fundamentada en la falta de supervisión de la rectora a sus subalternos.

CAPÍTULO 18: **18.1** La Lcda. Orieliz Ocasio Crespo y el control del expediente del caso para manipular el Panel Examinador; **18.2** La Orden incumplida dada por de la rectora Varela Llavona sobre el trámite del expediente completo del caso; **18.3** Admisión de la licenciada Ocasio Crespo de que manipuló la producción del expediente administrativo; **18.4** El contenido verdadero del expediente completo del caso; **18.5** Iniciativa propia de los representantes legales en el incumplimiento de órdenes y de la normativa. **CAPÍTULO 19:** **19.1** Lcda. Miriam B. Toledo David; Lcda. Josefina Cruz Meléndez y Lcda. Ámbar García Acabá: Más colusión legal y manipulación del expediente administrativo del caso en la Oficina de Asesoría Jurídica del Recinto de Río Piedras; **19.2** Indebida

solicitud de extensión de tiempo para incumplir con el artículo 14A del Reglamento Apelativo; **19.3** Imposibilidad jurídica de la solicitud de prórroga; **19.4** Colusión legal para posponer la atención del caso en sus méritos; **19.5** Nuevamente la manipulación del expediente del caso y el incumplimiento de órdenes por parte de la Lcda. Ámbar García Acabá; **19.6** La indebida solicitud de orden de manejo de caso y el contenido de los escritos; **19.7** Pretensión de los representantes legales de la UPR de usurpar el trabajo de la funcionaria de adjudicación; **19.8** Cero sanciones administrativas para la UPR por el incumplimiento de órdenes y de su propia normativa. **CAPÍTULO 20:** **20.1** La Lcda. Melissa Reyes Pérez: La promoción de la incompetencia; **20.2** Los efectos de la inhibición en los procesos adjudicativos; **20.3** El despropósito jurídico conceptual construido por los representantes legales del entonces presidente Ferrao Delgado; **20.4** La contradictoria resolución interlocutoria de la Junta de Gobierno y el informe de la Lcda. Melissa Reyes Pérez; **20.4.1** Primer error de la Junta de Gobierno: “Desestimar prematuramente el reclamo de la de la doctora y la licenciada Robles Ramos.”; **20.4.2** Segundo error de la Junta de Gobierno: “Ordenar que se agotaran remedios en un foro sin jurisdicción.”; **20.4.3** Tercer error de la Junta de Gobierno: “Presumir equivalencia entre la inhibición y la ausencia del presidente.”; **20.4.3.1** Inhibición versus ausencia; **20.4.3.2** El despropósito del procedimiento sugerido por la licenciada Reyes Pérez; **20.4.4** Cuarto error de la Junta de Gobierno: “Mostrar inconsistencia y prejuicio en torno a las comunicaciones.”; **20.4.5** Quinto error de la Junta de Gobierno: “Aceptar acríticamente la totalidad del informe de la licenciada Reyes Pérez.”; **20.5** El verdadero propósito del informe de la licenciada Reyes Pérez. **CAPÍTULO 21:** **21.1** El Lcdo. Marcos A. Román López: Una falsa pretensión de ser neutral e imparcial cuando se es todo lo contrario; **21.2** Reiteración innecesaria de la inhibición de los representantes legales principales del expresidente Ferrao Delgado; **21.3** Construcción de una falsa apariencia de imparcialidad; **21.4** La contradictoria intervención del licenciado Román López; **21.5** El uso indebido de tácticas dilatorias. **CAPÍTULO 22:** **22.1** La Lcda. Lourdes del Carmen Rodríguez Pérez y Lcdo. Marcos Díaz Galarza: Cuestionables maniobras procesales como representantes legales del expresidente Ferrao Delgado; **22.2** Indebida e inescrupulosa intervención de los inhibidos licenciados; **22.3** La ilicitud de las acciones de los asesores legales desde la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) del Recinto de Río Piedras hasta la presidencia de la UPR; **22.4** Responsabilidad de los escritos legales; **22.5** Cómplices y promotores del fraude académico. **CAPÍTULO 23:** **23.1** Lcda. Alondra Fraga Meléndez: Una delegación de facultades Apelativas “ultra-vires”, indebida e inaceptable; **23.2** La licenciada Fraga Meléndez y su caprichosa suspensión de los procedimientos apelativos; **23.3** La increíble Orden de la licenciada Fraga Meléndez del 9 de abril de 2024; **23.3.1** Una evidente mentira; **23.3.2** Su contrato con la UPR: Un conflicto de interés evidente; **23.3.3** Extensa y unilateral paralización de los procedimientos; **23.3.4** El abuso del Recinto apelado aprovechando las acciones u omisiones de la oficial examinadora Fraga Meléndez; **23.3.5** Un premio al incumplimiento del Recinto; **23.4** El Recinto de Río Piedras apelado no cumple las órdenes de la licenciada Fraga Meléndez y repite su manipulación del expediente administrativo del caso; **23.5** Cuestionamientos sobre el rol desempeñado y la parcialidad de la licenciada Fraga Meléndez; **23.6** Moción de Recusación e Inhibición en contra de la licenciada Fraga Meléndez; **23.6** El deber incumplido por la licenciada Fraga Meléndez; **23.6.1** ¿Cuál era el deber de la licenciada Fraga Meléndez?; **23.7** El rol y la obligada imparcialidad del oficial examinador y del funcionario de adjudicación; **23.8** Incompatibilidad contractual: fungir a la vez como representante legal de presidencia y como oficial examinadora de la apelación de la doctora y licenciada Robles Ramos; **23.9** La parcialidad de la Oficial Examinadora y su indudable interés económico; **23.10** Manifiesto antagonismo contra la doctora y licenciada Robles Ramos; **23.11** La inagotable saga antiética de conducta profesional reprochable de la oficial examinadora Fraga Meléndez y la indiferencia de la Junta de Gobierno. **CAPÍTULO 24:** **24.1** La cuestionable contribución de la Lcda. Lizzie Tomasini y el Dr. y Lcdo. José A. González Taboada al improcedente informe del Panel Examinador; **24.2** La estructura del informe; **24.2.1** al **24.2.16** Discusión determinaciones de hechos número 1al 18; **24.3** Conclusiones de derecho limitadas y contrarias a la normativa universitaria y al principio de mérito; **24.3.1** Primera afirmación incorrecta en las conclusiones de derecho: “Una reducida apreciación del alcance del Principio de Mérito.”; **24.3.2** Segunda afirmación incorrecta en las conclusiones de derecho: “Las entrevistas son un requisito institucional indispensable para completar el proceso de evaluación de reclutamiento.”; **24.3.3** Tercera afirmación incorrecta en las Conclusiones de derecho “La decana de la Escuela de Derecho actuó correctamente al determinar que la Apelante se había retirado del proceso de la segunda convocatoria.”

PARTE IV: El inexplicable, confuso y cuestionable rol de los gerentes universitarios ante el fraude académico perpetuado por la gerencia y el Comité de Personal de la Escuela de Derecho en el 2021, el incumplimiento de la normativa universitaria de algunos abogados en diversas dimensiones de la academia y la violación de los derechos de la Dra. y Lcda. Karin J. Robles Ramos de ser tratada en igualdad de condiciones durante las evaluaciones de reclutamiento.

CAPÍTULO 25: 25.1 Dra. Angélica Varela Llavona. ¿Hipocresía, complicidad, ausencia de rigor administrativo en rectoría o todas las anteriores?; 25.2 Acciones correctas de la Rectora; 25.3 El defectuoso legado del exrector Ferrao Delgado adoptado y mantenido por la rectora Varela Llavona ; 25.4 Razones para rechazar el informe del licenciado Sosa Ramírez; 25.5 El nombramiento del Panel, el alcance de su tarea y la supervisión del mismo; 25.6 La primera resolución del Panel, su informe y el secretismo del nombramiento de José A. Taboada González; 25.7 Evidente parcialidad y ánimo prevenido del Lcdo. José A. Taboada González; 25.8. La justificada consolidación de las dos apelaciones de la Dra. y Lcda. Karin J. Robles Ramos; 25.9 Resolución final de la Rectora; 25.10 Solicitud de reconsideración a la Resolución de la rectora Varela Llavona. **CAPÍTULO 26:** 26.1 El Dr. Orestes Quesada González, otro gerente universitario inducido al patrón de indiferencia institucional ante la corrupción gubernamental gestada por los asesores legales de la Universidad aludidos; 26.2 Solicitud al licenciado Román López; 26.3 Solicitud a la licenciada Fraga Meléndez; 26.4 Solicitud al expresidente Ferrao Delgado; 26.5 2da. Solicitud al licenciado Román López; 26.6 “Moción solicitando aclaración sobre la relación contractual de la Lcda. Alondra Fraga Meléndez con la UPR y otros asuntos”, del 12 de diciembre de 2024; 26.7 La indebida intervención del vicepresidente Quesada González: “Resolución y Orden” del 12 de diciembre de 2024; 26.7.1 Deliberado ocultamiento del nombre del adjudicar final de la segunda apelación; 26.7.2 Errado análisis y conveniente conclusión: el doctor Ferrao Delgado se inhibió en su carácter personal; 26.7.3 Propósito de la “Resolución y Orden” del Vicepresidente; 26.7.4 Implicaciones jurídicas de la “Resolución y Orden” de Quesada González; 26.7.5 La incomprensible declaración de No Ha Lugar a la “Moción para que se tome acción inmediata”; 26.7.6 Nuevamente, la costosa estrategia de la posposición; 26.7.7 Solicitud al vicepresidente Quesada González de que reconsiderara su Resolución y Orden; 26.8 Resolución interlocutoria del 12 de diciembre de 2024; 26.8.1 Finalidades de la Resolución Interlocutoria; 26.8.2 La resolución interlocutoria no consideró el expediente del caso; 26.8.3. La resolución interlocutoria descontextualizó la doctrina vigente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación a la recusación e inhibición de los juzgadores; 26.8.4 No existe determinación final y firme sobre la alegación de falta de jurisdicción del foro apelativo administrativo intermedio; 26.8.5 Moción para dejar sin efecto la Resolución Interlocutoria; 26.9 2da. Resolución y Orden del vicepresidente Quesada González y el abandono de su neutralidad; 26.9.1 Múltiples razones que hicieron indebida la 2da. Resolución del doctor Quesada González; 26.9.2 Un tono amenazante innecesario de un funcionario que debería ser neutral; 26.10 Moción ante la Junta de Gobierno de la UPR para dejar sin efecto la Resolución Interlocutoria del vicepresidente Quesada González y recusar a la licenciada Fraga Meléndez; 26.10.1 Justificaciones para someter la recusación de la oficial examinadora Fraga Meléndez comunicadas al vicepresidente.

PARTE V: El desempeño de los Tribunales señalados ante el fraude académico, la violación de la normativa y el límite razonable a la delegación de capacidad jurídica de adjudicación a las agencias administrativas.

CAPÍTULO 27: 27.1 La debatible presunción de regularidad, peritaje y corrección de las decisiones administrativas; 27.2 El *mandamus*; 27.2.1 Consideraciones y requisitos para expedir un *mandamus*; 27.3 El *mandamus* ante el Juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan; 27.3.1 Manipulación del TPI a través de falsas representaciones 27.3.2 Entero crédito a las alegaciones de la UPR; 27.4 Análisis crítico de la sentencia del Juez Anthony Cuevas; 27.4.1 Una falaz alegación de un procedimiento administrativo en curso; 27.4.2 Tres errores del Juez Anthony Cuevas; 27.4.2.1 PRIMER ERROR: Otorgar entero crédito a la alegación de la UPR (demandada) de que existía un procedimiento administrativo en curso para atender la controversia; 27.4.2.2 SEGUNDO ERROR: Otorgar entero crédito a la alegación de la UPR de que el motivo de su dilación para contestar y adjudicar la controversia e incumplir con los términos del Reglamento Apelativo, fue la paralización de los procedimientos de la segunda apelación; 27.4.2.3 TERCER ERROR: No considerar apropiadamente las implicaciones para el interés público de la no expedición del *mandamus*; 27.5 El TPI no debió autolimitarse judicialmente; 27.6 Demanda de sentencia declaratoria ante Jueza Katyana Farokhzadeh López del TPI-SJ; 27.7 Naturaleza y alcance de la Sentencia Declaratoria; 27.8 ¿Por qué se presentó la sentencia declaratoria? y la incorrecta alegación de la UPR de que la primera apelación estaba adjudicada; 27.8.1 La excusa del deliberado inconveniente procesal de la sentencia declaratoria; 27.8.2 Desistimiento sin perjuicio de la sentencia declaratoria; 27.9 La tímida y cuestionable intervención del Tribunal de Apelaciones; 27.9.1 La gran contradicción: Un foro inhibido, pero manteniendo el control de adjudicar el caso; 27.9.1.1 Las excepciones a la regla general de la revisión de decisiones o resoluciones administrativas; 27.9.1.2 Realidad jurídica de los foros apelativos administrativos de la UPR; 27.9.1.3 La regla general no puede invocarse como excusa; 27.10 El Tribunal Supremo optó equivocadamente por no intervenir; 27.10.1 Fundamentos del “Certiorari” y de la moción en auxilio de jurisdicción y la pérdida de esperanza en una oportuna y urgente intervención del Tribunal Supremo; 27.10. 2 Reconsideración a una incomprensible Declaración de no ha lugar a la Petición de *Certiorari* y la Moción en Auxilio de Jurisdicción.

28. CONCLUSIÓN **28.1** Considerar suspender la deferencia a las decisiones administrativas de los foros apelativos administrativos de la UPR; **28.2** Veintiún (21) cuestionables actuaciones, pretensiones y equivocadas determinaciones de los funcionarios de la UPR que incumplen su propia normativa; **28.3** Veintisiete (27) ejemplos de violaciones e incumplimientos de la normativa realizados por funcionarios universitarios durante el trámite de las apelaciones de la doctora y licenciada Robles Ramos; **28.4** Una cultura jurídica empobrecida y corrompida; **28.5** Derogar o reformar la sección 47.6 del Reglamento General ; **28.6** Derogar la práctica profesional extramural de los abogados en la academia; **28.7** Reformar el procedimiento apelativo administrativo con la participación del personal docente a través de la negociación colectiva; **28.8** Un gesto de justicia para la doctora y licenciada Robles Ramos.

29. APÉNDICES: **Apéndice 1.** Costo Aproximado del Trámite de las Apelaciones de la Dra. y Lcda. Karin J. Robles Ramos (Apelante); **Apéndice 2.** Manipulación del Expediente Administrativo del Caso de la Dra. y Lcda. Karin J. Robles Ramos (Apelante) POR PARTE DE ALGUNOS REPRESENTANTES LEGALES DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

